

(Especial para "El Nacional")

Al dar comienzo a la extracción del petróleo, los trusts concesionarios pusieron en práctica su sistema colonialista de explotación de las masas trabajadoras venezolanas y, entre otros aspectos, instauraron los "campos petroleros" o lugares sólidamente cercados, sustraídos a las leyes venezolanas, rigiéndose por reglamentos expresamente elaborados y accesibles sólo al personal enganchado. Esos "campos", similares a los Bateyes de los Centrales Azucareros que los yanquis tenían en Cuba y a los Centros petroleros que existieron en México hasta 1938 en que fué nacionalizada la industria petrolera, eran pequeños Estados dentro del Estado Venezolano. Las carreteras que daban acceso a ellos, las consideraban las compañías como de su exclusiva propiedad y prohibido transitarlas a los particulares, así como prohibido también el ejercicio del comercio en el interior de los "campos". A los trabajadores enganchados los alojaban en galpones o casuchas antihigiénicas, mientras que a los empleados extranjeros les proporcionaban casas confortables, estableciendo así una irritante discriminación con el personal venezolano. Los atropellos a los familiares de los trabajadores que quedaban cesantes llegaron a tal extremo y tal era la complicidad de las autoridades, que los trabajadores venezolanos fueron precipitados a hacerse justicia por sí mismos para defender su dignidad. No lleva su nombre ninguna calle o pueblo del país, pero los trabajadores petroleros de Oriente recuerdan con respeto y veneración al joven obrero que el año 34, al enterarse de que su madre, su esposa e hijos habían sido lanzados brutalmente de la casucha que ocupaban, castigó al gringo autor del vejamen quitándole la vida. Su acción tuvo una profunda repercusión. Los funcionarios de las compañías, empavorecidos, comenzaron a respetar al "nativo".-

Sin estar aún estructurado en sindicatos, el movimiento obrero realizó acciones en demanda de mejores salarios, mejores condiciones de vida y de servicios, contra los atropellos de que era víctima, reivindicaciones que acogió luego la Ley del Trabajo de 1936. En su artículo 11 se estableció que todas las ordenes, instrucciones, etc. "debían ser dadas a los trabajadores en idioma castellano"; en el 12 se restableció la libertad de "ejercer el comercio en los centros de trabajo". El libre "tránsito por carreteras o caminos que conduzcan a los centros de trabajo de empresas petroleras" lo consagró el art. 14 para las personas y para el transporte de mercancías que se "destinen a ser vendidas en esos lugares", prohibiendo el cobro de impuestos o peajes por parte de las compañías. Su Sección Segunda, Capítulo VI -De los Campamentos de Trabajadores- estableció categóricamente obligaciones para las compañías petroleras: construir campamentos para proveer de habitaciones higienicas a los trabajadores y sus familiares; sostener a su costo escuelas de instrucción primaria, gratuita y obligatoria para los hijos de los obreros y empleados; construir hospitales montados de acuerdo con los preceptos de la higiene moderna; crear becas para sus trabajadores, etc. Esa Ley consagró el derecho de los trabajadores a organizarse en Sindicatos y a declararse en huelga.-

Las luchas heroicas de los trabajadores petroleros bajo la sangrienta tiranía de Juan Vicente Gómez tuvieron, pues expresión en las disposiciones de

la Ley del 36 que los defendía contra el sistema colonialista. La vivienda higiénica, las escuelas, la asistencia médica dejaron de ser reivindicaciones de los trabajadores, para convertirse en obligaciones legales que el Estado no ha hecho cumplir a las compañías en todo su alcance. De los 43.000 trabajadores que hoy prestan sus servicios en las empresas petroleras, 17.000 tan solo están dotados de viviendas que no responden, por cierto, a los requisitos establecidos por la Ley. Desde 1936 los Gobiernos de turno no solo han eximido a las compañías de muchas de sus obligaciones, sino que han permitido que todavía pervivan en los "campos petroleros" modalidades del sistema colonialista. Aunque ya no inaccesibles, los "campos" se mantienen cercados y no forman parte de un Conjunto Municipal, como una otra cualquiera urbanización, con los pueblos o ciudades que se han formado en su vecindad. Campo petrolero y ciudad o pueblo son mantenidos extraños el uno al otro como entidades diferentes, antagonismo que hace resaltar aún más el abandono, la anormalidad urbanística, la carencia de servicios de los pueblos que por su origen son consecuencia del sistema colonialista.-

Como sus nombres lo recuerdan -Pueblo Ajuro, por ejemplo- esos pueblos nacieron de la necesidad de alojamiento de los miles de obreros a los que las compañías no suministraban vivienda, por una parte y, por la otra, de las diversas actividades comerciales y servicios que en toda comunidad humana son necesarios. La ausencia de una política de población tanto nacional como estatal, favoreció ese anormal desarrollo. Los ranchos, los comercios, los establecimientos fueron instalándose arbitrariamente, a juro, sin orden ni control y sin que desde su origen fueran creados los servicios de interés colectivo. Los Gobernadores de los Estados cuando más se preocuparon de recaudar impuestos extraordinarios a los bares, cantinas y prostíbulos. En Anzoátegui se mencionan los nombres de altos funcionarios que desde Barcelona se enriquecieron con el negocio de la trata de blancas, con ramificaciones en Anaco, El Tigre, El Tigrillo, etc. Se designaban Jefes Civiles o Comisarios, pero ningún impulso se dió a la vida municipal. La especulación autorizada de comerciantes inescrupulosos/a los ^{hizo} "Comisariatos" imprescindibles para los obreros y empleados petroleros. Esa es la realidad.-

Si los "Campos Petroleros" fueran considerados como urbanizaciones que junto con el pueblo vecino formen un todo administrado por un Concejo Municipal, desaparecería el antagonismo existente hoy, ya que no son antagónicas entre sí las diversas urbanizaciones, entre ellas las de trabajadores, que integran el todo que es Caracas. Eximiendo a las compañías de sus obligaciones de dotar de viviendas y servicios a sus trabajadores no se le pone término al problema urbanístico y administrativo existente. Se le pone término obligando a las compañías a cumplir con las disposiciones legales y a someterse a pautas que establezca el Estado para integrar en un todo municipal a las "urbanizaciones petroleras" con los pueblos en desarrollo.

Las compañías petroleras al dar a conocer sus "cálculos" sobre lo que para ellas implicaba de inversiones el Contrato Colectivo, se dieron, como dicen los galleros, con las espuelas al declarar que tendrían que invertir 800 millones de bolívares en la construcción de viviendas, lo que implica reconocimiento de que estaban en mora de muchos años en el cumplimiento de la Ley, es decir, que tendrían que invertir 800 millones por no haber construido viviendas

a medida que desarrollaban la explotación y refinación del petróleo. El haber se aprovechado de las complacencias de los gobiernos, no las libera de dicha obligación, por lo que esa inversión deben hacerla de las reservas, como capital, y no como gastos generales, según interesadamente lo aceptan los partidarios de la "remodelación", al sostener que esa obligación sería gravosa para el fisco por la disminución que acarrearía al impuesto sobre la renta.

Por otra parte no es la "remodelación" lo que impedirá que al disminuir o extinguirse el petróleo en esos lugares, disminuyan de importancia o desaparezcan los pueblos en cuestión al no contar con el volumen de salarios de los trabajadores petroleros. Para que esos pueblos o ciudades pervivan más allá de la explotación petrolera, lo que se requiere es desde ahora dotarlos de fuentes de trabajo agrícolas e industriales que les den vida propia e independiente. Esa debe ser la preocupación del Estado y no la de eximir a las compañías de sus obligaciones. Las viviendas y servicios construídos por las compañías quedarán como pequeñísima amortización del capital petróleo que nos han sustraído.-

Los trabajadores petroleros y la población en general, deben fortalecer la lucha porque las compañías sean obligadas a cumplir con la Ley del Trabajo, dando de viviendas a sus trabajadores, de escuelas, de servicios asistenciales.-